

“Reconocimiento mutuo y principio de reciprocidad en la Orden europea de detención y entrega”.

Se trata de reflexionar acerca del alcance del principio de reciprocidad que, como principio clásico del derecho internacional público, se exige tradicionalmente en el proceso de extradición. Que la reciprocidad es un principio de carácter constitucional que informa al procedimiento de extradición no plantea excesivos problemas excepto, quizás, en el alcance y contenido que deba darse al mismo. Esto es así porque que son múltiples y variadas las interpretaciones que podemos encontrar acerca de esta cuestión, fundamentalmente, como afirma el Tribunal Constitucional, en lo que se refiere al grado de exigencia de la reciprocidad entre los distintos Estados.

No cabe duda que el principio de reciprocidad supone un axioma de la cooperación jurídica internacional, sin embargo, también es cierto que, en la actualidad, no son pocos los ordenamientos jurídicos que, en materia de cooperación jurídica internacional, suprimen este principio de reciprocidad. En este sentido, el artículo 277 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha suprimido la exigencia de la reciprocidad tras la reforma operada en el año 2015 en materia de cooperación jurisdiccional. En el mismo sentido, la Ley sobre cooperación jurídica internacional en el ámbito civil cuando regula el *principio general favorable de cooperación*, en su artículo 3, también parte de la no exigencia de reciprocidad entre los Estados.

Aun cuando la Decisión Marco que regula la euroorden, así como la ley española de transposición -tanto la derogada Ley 3/2003 como la actual Ley de Reconocimiento Mutuo de 2014- no hacen referencia alguna al requisito de la reciprocidad nos planteamos el alcance de este principio conocido como principio de legalidad extradicional en el sentido de cuestionarnos si resulta exigible únicamente en el proceso de extradición o, por el contrario, si debe entenderse vigente en el sistema europeo de detención y entrega.

La doctrina no es pacífica en esta cuestión así, un sector doctrinal que parte de la consideración de la orden europea de detención y entrega como una extradición simplificada y, por tanto, la engloban en un concepto amplio de extradición, a pesar de las importantes diferencias que existen entre ambos instrumentos de cooperación judicial internacional, afirman que el principio de reciprocidad resulta igualmente aplicable en el procedimiento de la euroorden. Por lo que, partiendo de esta idea, analizamos el posible régimen de aplicación del principio de reciprocidad en el procedimiento de la orden europea de detención y entrega poniendo de relieve los posibles obstáculos que la exigencia de la garantía de reciprocidad por parte del Estado emisor podría causar en este sistema de entrega europeo. Un primer obstáculo, por ejemplo, lo podríamos encontrar en el hecho de que el control del cumplimiento de la exigencia de reciprocidad es competencia del Gobierno y el procedimiento de la orden de detención y entrega no prevé la intervención del Gobierno, excepto en lo que se refiere a la intervención del Ministerio de Justicia como autoridad central.

Por el contrario, el sector de la doctrina que considera a la euroorden como un instrumento de cooperación judicial internacional diferente de la extradición se muestra partidario de negar la vigencia de este principio de legalidad extradicional atendiendo a que la referencia prevista en el artículo 13.3 CE a los procesos extradicionales no alcanzan, en ningún caso, a la euroorden.

En el análisis de esta posible aplicación del principio de reciprocidad en el sistema de la orden europea de detención y entrega no podemos dejar de lado la postura de nuestro Tribunal Constitucional al respecto, adelantando que ha mantenido el mismo criterio desde la conocida sentencia 177/2006 hasta la más reciente sentencia 132/2020 en la que reconoce que el principio de reciprocidad es un principio de contenido eminentemente político presente en la extradición y que no se identifica en absoluto con la orden europea de detención.

Atendiendo, por tanto, a la ausencia de regulación normativa del principio de reciprocidad, tanto en la normativa europea que regula el procedimiento de la orden europea de detención y entrega, esto es, en la Decisión Marco 2002/584/JAI, como en la norma española de transposición (LRM) y con el apoyo del criterio del Tribunal Constitucional que reconoce la ausencia de reciprocidad en la eurorden, pondremos de manifiesto las razones que nos llevan a afirmar, por un lado, que efectivamente dicha reciprocidad no tendría cabida en el procedimiento de la euroorden y, dado que desde nuestro modesto punto de vista, nos encontramos ante instrumentos de cooperación judicial distintos, no resultaría aplicable el mandato constitucional que regula el principio de legalidad extradicional.

Por otro lado, sin embargo, no podemos dejar de reconocer que la ausencia de previsión normativa de la reciprocidad en los textos que regulan el procedimiento de la orden europea de detención y entrega, tanto en ámbito europeo como nacional, no implica una eliminación expresa de este principio básico de la extradición. Antes, al contrario, dicha omisión parece que ofrece la posibilidad a los Estados de, en la medida de lo posible, condicionar la entrega de la persona reclamada al cumplimiento del requisito de la reciprocidad.